

Escalada de la crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos

La relación entre Colombia y Estados Unidos atraviesa su nivel de tensión más alto en más de dos décadas. Washington ha iniciado una estrategia de sanciones focalizadas contra el presidente Gustavo Petro y su círculo cercano, buscando aislarlo políticamente y reducir su margen de maniobra internacional sin romper la cooperación estructural con el Estado colombiano.

El gobierno estadounidense ha decidido separar la relación bilateral del liderazgo presidencial, preservando los intereses económicos y de seguridad compartidos mientras incrementa la presión política y reputacional sobre Petro. El riesgo geopolítico es alto y creciente: el deterioro avanza de forma sostenida y el margen de reversión se reduce con cada intercambio público hostil.

Evaluación estratégica

El patrón de comportamiento reciente de Estados Unidos confirma un cambio cualitativo en la relación: la diplomacia correctiva fue reemplazada por un enfoque punitivo selectivo. La decisión de revocar la visa de Petro, la descertificación antidrogas con mención explícita a su gobierno y las declaraciones públicas de figuras del Partido Republicano que lo vinculan con el narcotráfico muestran que Washington ha optado por una estrategia de contención personal.

Las evidencias indican que el curso de acción más probable es la imposición de sanciones individuales bajo marcos legales como OFAC o Magnitsky. En este escenario, la probabilidad de que Estados Unidos mantenga la cooperación operativa con instituciones colombianas —fuerzas de seguridad, agencias técnicas y sectores económicos estratégicos— es alta, ya que su objetivo no es aislar al país sino al mandatario. Este escenario presenta una probabilidad estimada del 60-70 %.

Un segundo curso de acción posible, aunque menos probable, es la transición hacia un escenario de ruptura política y sanción ampliada. Este implicaría sanciones financieras y comerciales que alcancen al Estado colombiano, suspensión de programas de cooperación y la imposición de aranceles. La probabilidad de que esta escalada ocurra es media-baja, en torno al 25 %, pero crece de manera proporcional a la persistencia del discurso confrontacional de Petro y su alineamiento con Venezuela. Finalmente, el escenario de normalización o “engagement crítico” resulta poco verosímil dadas las acciones y declaraciones acumuladas de ambas partes.



Implicaciones

La actual confrontación entre Washington y Bogotá redefine las condiciones políticas y reputacionales de Colombia en el sistema internacional. En el corto plazo, el país mantendrá abiertos los canales técnicos y comerciales, pero bajo un entorno de desconfianza que condicionará cualquier agenda bilateral de cooperación o inversión. Para el gobierno estadounidense, Colombia sigue siendo un socio clave en materia de seguridad y control migratorio, pero su liderazgo político es percibido como errático y cada vez más hostil.

El sector privado colombiano enfrenta un entorno de mayor escrutinio financiero y regulatorio. La posibilidad de que funcionarios o entidades vinculadas al Ejecutivo sean objeto de sanciones individuales incrementa los riesgos de cumplimiento y reputación para empresas con exposición a programas estatales o con relaciones contractuales con el gobierno central. En el plano diplomático, la distancia entre la Presidencia y los cuerpos técnicos —Cancillería, FF. MM. y Ministerio de Hacienda— puede ampliar la brecha institucional interna y debilitar la capacidad de respuesta coordinada del Estado ante la crisis.

La narrativa de confrontación, sostenida por Petro como instrumento político, seguirá elevando la temperatura interna y limitando la posibilidad de restablecer confianza con Washington. El uso del conflicto externo como recurso discursivo podría fortalecer la cohesión de su base política, pero a costa del aislamiento internacional y del deterioro de los vínculos estratégicos con el principal aliado hemisférico del país.

Outlook (90-180 días)

En el horizonte de seis meses, el escenario más probable es la aplicación de sanciones individuales antes del cierre de 2025, especialmente si continúan las acusaciones mutuas y la retórica antiestadounidense desde Bogotá. Este escenario mantiene activa la cooperación institucional, pero con un fuerte componente de supervisión política desde Washington.

Un segundo escenario, de ruptura más profunda, podría materializarse si Petro intensifica su respaldo a Nicolás Maduro o si Estados Unidos obtiene evidencias que justifiquen sanciones más amplias. En ese caso, Colombia enfrentaría una degradación significativa de su posición internacional y un incremento del riesgo país.



Aun con canales técnicos abiertos, el margen de maniobra diplomática es limitado. La tendencia dominante apunta a una crisis sostenida con consecuencias reputacionales y financieras localizadas, pero con potencial de escalar si el gobierno colombiano mantiene su estrategia de confrontación.

Estados Unidos ha pasado del desacuerdo diplomático a la acción punitiva personalizada, transformando la relación bilateral en un vínculo de cooperación condicionada. Las sanciones focalizadas y la narrativa de aislamiento político marcan el inicio de una etapa de relaciones frías, caracterizadas por la coexistencia de cooperación técnica y hostilidad política.

Colombia deberá gestionar esta dualidad con prudencia: preservar la confianza institucional con agencias estadounidenses, contener el discurso presidencial y anticipar posibles sanciones que afecten su entorno financiero y reputacional. La probabilidad de recuperación de la confianza en el corto plazo es baja; la probabilidad de escalamiento, alta.

Sanciones selectivas de EE. UU. contra el gobierno de Gustavo Petro

